

# CONTRADICCIONES

**A** cada paso, el Gobierno se encuentra con una contradicción que se hace continua: mantener una credibilidad política en su deseo de una reforma que conduzca al país hacia un sistema identificable con los de las democracias europeas entre las que quiere figurar, y mantener los esquemas de comportamiento autocrático que desean partes importantes del poder y a los que autorizan las leyes actuales. Se dice insistentemente para justificar esas contradicciones que estamos en una época "de transición"; pero no se ven razones válidas por las cuales esa transición no se haga más con arreglo al futuro que se supone que se quiere establecer que a un pasado que no cesa.

**L**a credibilidad del Gobierno había aumentado en la última semana con las oportunas declaraciones de su vicepresidente primero, teniente general Gutiérrez Mellado, que tuvieron incluso la virtud de hacer subir la Bolsa, al dar al asustado capital una seguridad visible: la de que el camino de la "reforma" estaba respaldado. Y había aumentado con el impacto del viaje político del Jefe del Estado a Francia, como signo de la rotura de una serie de premisas y contenciosos en la aproximación a las democracias clásicas en contra de los elementos más retrasados del Régimen. Se rompe, en cambio, en cuanto a comportamiento frente a una huelga importante, como lo es la de los transportes de superficie en Madrid. Parece ya claro que los miembros del Gobierno no tienen los reflejos hechos a estos percances en la vida democrática de cualquier país. Lo demostró ya con la huelga de Correos, en la que tuvo la peregrina idea de llamar equipos de voluntarios. Reitera ahora su falta de temple al enfrentar a la Fuerza Pública contra los huelguistas, al negarse al diálogo con los representantes reales de estos huelguistas, al no dar ocasión de que se expresen realmente cuáles son las circunstancias en que se ha decidido la huelga y cuáles las razones que asisten o pueden asistir a estos obreros para lanzarse al paro. Por el contrario, en las declaraciones del director de la empresa se dijo, como es costumbre, que la huelga obedece a motivos "extralaborales". En este tipo de manifestaciones es donde comienza ya a perderse la credibilidad. Incluso con una clara tendencia a dar razones a los enemigos de la misma "reforma" que está patrocinando al Gobierno: aquellos que utilizan todos los pretextos para indicar que una democratización vaya a conducir al país al caos, y a los que preconizan el regreso a la manera fuerte para implantar el "orden" en la vida ciudadana.

**S**e ha dicho repetidas veces —y se ha dicho en estas mismas páginas— que la huelga es algo indeseable, que perturba la vida pública y la economía de todos —sobre todo, en los países donde la economía es de todos—; se ha dicho también que es una tragedia a partir del trabajador mismo que tiene que acudir a esa arma, sobre todo en países donde, como el nuestro, no hay cajas sindicales de resistencia, las huelgas son ilegales y los huelguistas pueden ser reprimidos por la Policía, despedidos, encarcelados. Pero la huelga es, al mismo tiempo, un derecho reconocido en los países occidentales de corte democrático, por una razón determinada: porque no se ha creado todavía un organismo de armonía suficiente para eliminar los conflictos entre el capital y el trabajo. En España se soñó que se había creado ese organismo por medio de los sindicatos verticales. Se ha demostrado ya hasta la saciedad que no es así. Se trata de entrar tímidamente en un sistema sindical clásico, pero no se acaba de decidir. Entre tanto, desprestigiados los sindicatos verticales por el propio Gobierno y no aceptada la legalidad de los otros, el país está sin un mecanismo sindical apropiado para mitigar estos conflictos. La huelga sigue siendo ilegal. Lo cual no impide que exista. Los organismos afectados siguen sosteniendo como dogma el "principio de autoridad" y el de no tratar con comisiones o delegaciones que no sean verticales: los conflictos se endurecen. Cierto que el Gobierno ha renunciado —hasta ahora— a su arma clásica de la militarización del personal en

huelga, y ha adoptado la correcta solución de habilitar líneas de transporte encargadas al personal militar, para paliar los efectos del problema sobre toda la vida madrileña. Pero no va al fondo de la cuestión, ni parece admitirlo: el real malestar laboral de los operarios de la EMT.

**N**O son estas las únicas faltas de credibilidad efectiva que el Gobierno está dando en su comportamiento. Las detenciones menudean, se van haciendo cada vez más numerosas —con respecto a etapas anteriores—, la falta de interés por negociar con la oposición democrática es manifiesta; mientras que, por el contrario, los acuerdos con la oposición autocrática se hacen patentes. Mientras la Policía se hacía presente en una reunión interna de Coordinación Democrática —sin interrumpirla y sin impedirle, pero recordando con su presencia que en cualquier momento se puede declarar ilegal—, el Gobierno concertaba con la Alianza Popular una serie de enmiendas posibles a su proyecto de Ley de reforma; enmiendas que alejan más al proyecto de un carácter democrático real y se asemejan a la democracia orgánica que iba a ser superada. Cierto que el Gobierno busca el pacto con aquellas fuerzas que tienen representación en las Cortes, que han de debatir su proyecto en las Cortes, que con las que están fuera y carecen de todo medio de presión que no pueda ser denominado como subversivo. Pero precisamente esta irregularidad es la que tendría que reformarse para que hubiera, realmente, reforma.

**E**N cuanto al comportamiento del Gobierno en las posibles elecciones legislativas que se decidan tan unilateralmente, podría tenerse ya una muestra por lo que se está preparando para el referéndum —que, hasta ahora, no ha traslucido su verdadero contenido—. Se asegura ya que su presupuesto es de 1.200 millones de pesetas, y que una tercera parte de este presupuesto sería destinado a propaganda. A propaganda, naturalmente, del "Sí". Suponiendo que las otras dos partes estuvieran justificadas por los gastos naturales de la votación, quedaría esta enorme cifra de cuatrocientos millones de pesetas para propaganda y relaciones públicas, que habremos de pagar todos los contribuyentes, incluyendo desde luego a los que puedan ser decididos partidarios del "no". Al parecer, alguna de las agencias de publicidad a las que se había encargado la campaña del referéndum ha declinado la oferta, aun suponiéndole un ingreso considerable, por razones éticas. Está claro que ninguna fuerza política que decida la negación a las

